

República de Colombia



Rama Judicial
Distrito Judicial del Caquetá
Juzgado Primero Penal Municipal
Florencia

ACCIÓN DE TUTELA

REFERENCIA: 1800140040012021-00074

ACCIONANTE: OMAR TRUJILLO POLANIA

ACCIONADO: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

SENTENCIA DE TUTELA No.74

Florencia Caquetá, Ocho (08) de Julio de dos mil veintiuno (2021).

OBJETO A DECIDIR

Procede este Despacho a decidir la acción de tutela interpuesta por el señor OMAR TRUJILLO POLANIA, contra el ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, por la presunta violación al derecho fundamental de petición.

I. HECHOS

En apoyo de sus pretensiones, se exponen en síntesis los hechos que motivaron la interposición de la acción y se encuentran consignados en el escrito de tutela, así:

1.El diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), actuando como apoderado de MARIA LUCELIDA MONTEALEGRE QUINTERO, mayor de edad, vecina y domiciliada en Florencia – Caquetá, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.725.439, mediante correo electrónico dirigido a alcaldia@florencia-caqueta.gov.co, correo institucional del MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ, el accionante presentó petición solicitando a la administración del Municipio de Florencia

“se remita copia de los documentos, emitidos por el municipio o que se encuentren en su poder, que establecieron las características del lote de terreno donde se ubica el Cementerio Central, que es de propiedad del Municipio de Florencia. (Si de este documento existiera distintas versiones generadas en varias vigencias, se solicita sean remitidos todos). 2. Se remita copia del Acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Florencia – Caquetá, otorgó facultades a la Alcaldía Municipal de Florencia – Caquetá, para suscribir el Contrato de Concesión mediante el cual se otorgó el lote de terreno donde se ubica el Cementerio Central a la Arquidiócesis de Florencia – Caquetá. (Si de este documento existiera distintas versiones generadas en varias vigencias, se solicita sean remitidos todos). 3. Se remita copia del Contrato de Concesión mediante el cual la Alcaldía Municipal de Florencia – Caquetá, en

Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia Caquetá
e-mail: jpenmfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
teléfono 435 8706 PALACIO DE JUSTICIA, AVENIDA 16 NO.6-47
BARRIO SIETE DE AGOSTO

nombre del Municipio, otorgó el lote de terreno donde se ubica el Cementerio Central a la Arquidiócesis de Florencia – Caquetá. (Si de este documento existiera distintas versiones generadas en varias vigencias, se solicita sean remitidos todos). 4. Se sirva remitir copia de los informes de ejecución contractual, informes de supervisión contractual, informes de interventoría contractual, informe de vigilancia del contrato, que hayan sido expedidos o estén en poder de la administración Municipal, acerca del Contrato de Concesión mediante el cual se otorgó el lote de terreno donde se ubica el Cementerio Central a la Arquidiócesis de Florencia – Caquetá. 5. Se sirva informar el nombre, número de identificación y cargo de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Florencia – Caquetá, encargados de realizar la supervisión y vigilancia del Contrato de Concesión mediante el cual se otorgó el lote de terreno donde se ubica el Cementerio Central a la Arquidiócesis de Florencia – Caquetá. 6. Se sirva remitir copia de los convenios suscritos por la administración del Municipio de Florencia – Caquetá, en los que haya otorgado o asignado recursos a la Arquidiócesis de Florencia – Caquetá, dirigidos a la administración del Cementerio Central. 7. Se sirva remitir copia de los requerimientos, quejas, reclamos, oficios, peticiones dirigidos por la comunidad y la ciudadanía, al igual que cualquier ente de control, en el que pusiera en evidencia fallas estructurales del Cementerio Central, necesidad de realizar mejoras o se solicitara cualquier acción de la administración Municipal sobre el Cementerio Central. 8. Se sirva remitir copia del croquis, relato de hechos, y en general todo documento emitido o que este en poder de la administración Municipal, que detallen los hechos acaecidos el cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021), cuando el muro de contención y/o pared del Cementerio Central se desplomó sobre una vivienda en el barrio la Floresta, causando la muerte en el acto el señor Robert Montero González, la señora Adriana Montealegre Quintero, y la menor de edad Karol Sofia Montero Montealegre. (En caso de negarse a la petición, alegando reserva legal de la información, sírvase exponer en forma motivada la consideración y su concordancia con la Ley 1712 de 2014). 9. Se sirva remitir copia del dictamen pericial que fue realizado por la Alcaldía del Municipio de Florencia – Caquetá, o por un tercero, que se encuentre en poder de la administración, que detallen su estudio en los hechos acaecidos el cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021), cuando el muro de contención y/o pared del Cementerio Central se desplomó sobre una vivienda en el barrio la Floresta, causando la muerte en el acto el señor Robert Montero González, la señora Adriana Montealegre Quintero, y la menor de edad Karol Sofia Montero Montealegre. (En caso de negarse a la petición, alegando reserva legal de la información, sírvase exponer en forma motivada la consideración y su concordancia con la Ley 1712 de 2014). 10. Se sirva remitir copia de los documentos que constaten las adecuaciones realizadas al Cementerio Central, en general, y el específico las establecidas y exigidas en la Resolución número 1447 de 2009, expedida por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección social. Misma que establece la responsabilidad de los Municipios, respecto a los cementerios, en los siguientes términos: ARTICULO 44.- INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Las direcciones de departamentales, municipales y distritales de salud ejercerán en el marco de las competencias definidas en las Leyes 09 de 1979, 715 de 2001 y 1122 de 2007 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, las acciones de inspección, vigilancia y control sobre las condiciones higiénico-sanitarias de los cementerios y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución. PARÁGRAFO. Las direcciones departamentales, municipales o distritales de salud. a través del funcionario o dependencia encargada, deben conservar en lugar seguro y apropiado, las fotocopias de las inscripciones de defunciones haciendo un consolidado mensual para ser utilizado con fines epidemiológicos. ARTÍCULO 45.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES. Compete a las

direcciones departamentales, municipales o distritales de salud, adelantar los procedimientos para la adopción y aplicación de las medidas de prevención con el fin de cumplir con las disposiciones de la presente resolución; así como la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y sanciones previstas en los ARTÍCULOS 576 y siguientes de la Ley 09 de 1979 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. PARÁGRAFO. Las autoridades de policía del orden nacional, departamental, distrital o municipal prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. ARTÍCULO 46.- TRANSICIÓN. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se concede un término de un (1) año para que los cementerios que actualmente se encuentren en funcionamiento, cumplan con las disposiciones previstas en la presente resolución. De no encontrasen adecuaciones del Cementerio Central a los términos exigidos en la Resolución precitada, sírvase dejar constancia explícita y concreta. 11. Se sirva remitir copia de todos y cada uno de los documentos que consten en poder de la Alcaldía del Municipio de Florencia – Caquetá, que hayan sido agrupados en un expediente a partir de los hechos acaecidos el cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021), cuando el muro de contención y/o pared del Cementerio Central se desplomó sobre una vivienda en el barrio la Floresta, causando la muerte en el acto el señor Robert Montero González, la señora Adriana Montealegre Quintero, y la menor de edad Karol Sofía Montero Montealegre. (En caso de negarse a la petición, alegando reserva legal de la información, sírvase exponer en forma motivada la consideración y su concordancia con la Ley 1712 de 2014).

Indicando a la presente fecha no he obtenido una respuesta frente a la solicitud.

II. PRETENSIONES

Que se declare que el MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ, vulneró el Derecho Fundamental de Petición y se ordene al MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ, que de forma inmediata, resuelva y notifique la respuesta a la Petición en forma clara, oportuna y de fondo; esto es, que responda a todas y cada una de las cuestiones planteadas en la forma idónea y con los documentos solicitados que fundamentan la respuesta. TERCERO: Ordenar al MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ, que en un término de diez (10) días informe sobre el cumplimiento de lo concedido en la acción Constitucional.

ELEMENTOS DE JUICIO:

Copia de la petición radicada diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), radicado mediante correo electrónico dirigido a alcaldia@florenciacaqueta.gov.co, correo institucional del MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ.

III. TRAMITE PROCESAL

La acción de tutela fue sometida a reparto y le correspondió a este despacho quien por Auto Interlocutorio No.133 del 25 de Junio de 2021 la admitió requiriendo a ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA para que expusieran las razones que estimara necesarias con relación a los hechos y pretensiones planteados, concediéndole el término de dos (2) días.

IV. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES

Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia Caquetá
e-mail: jpenmfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
teléfono 435 8706 PALACIO DE JUSTICIA, AVENIDA 16 NO.6-47
BARRIO SIETE DE AGOSTO

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Guardo silencio y no dio respuesta a la acción de tutela en el término concedido por el Juzgado.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 estableció la figura de la “Acción de Tutela” como un mecanismo de protección a los derechos fundamentales constitucionales cuando resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares en los casos taxativamente señalados en la ley.

Así mismo, el Decreto reglamentario 2591 de 1991 señaló que esta vía constitucional es excepcional, preferente y sumaria y fue establecida con el fin de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que constituye uno de los fines esenciales del Estado de acuerdo con el artículo 2º de la Carta Magna.

COMPETENCIA

El Despacho advierte que cuenta con competencia legal para determinar en derecho frente al presente asunto (Art. 37 del Decreto 2591 y numeral 1º, inciso 3º del Decreto 1382 de 2000 y Artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017).

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Debe establecer este Despacho si ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, está vulnerando el derecho fundamental de petición invocado por OMAR TRUJILLO POLANIA al no contestar la solicitud de fecha 11 de Febrero de 2021 radicado en la misma fecha en la entidad accionada, mediante el cual *solicita a ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA que se estudie una concertación para la servidumbre o permiso de paso que tiene la empresa MOVISTAR sobre el predio, una compensación económica acorde con retroactividad a los 10 años que ha usado el predio sin consentimiento, se acuerde un arriendo o de lo contrario el retiro definitivo de dicho poste.*

EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

➤ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución establece que *“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*

En concordancia con la anterior disposición, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sostiene que se encuentran legitimados en la causa por activa: (i) la persona directamente

afectada; (ii) el representante legal; (iii) el apoderado judicial; (iv) el agente oficioso; (v) el defensor del pueblo; o (vi) los personeros municipales. Así pues, la acción de tutela permite que exista una mayor flexibilidad en su interposición, ya que contempla la posibilidad de que sea presentada por diferentes actores.

El señor OMAR TRUJILLO POLANIA, interpone la presente acción de tutela a nombre propio como apoderado judicial, por lo que se encuentra legitimado para promover la acción de tutela (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art. 10º).

➤ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

En el caso sub examine, la acción de tutela se presentó por la presunta violación al derecho de petición por parte de ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA; autoridad pública, en tal virtud, está acreditado en este asunto la legitimación por pasiva.

DECISIÓN DE INSTANCIA

La acción de Tutela es un instrumento jurídico, confiado por la Constitución Nacional a los Jueces e instituida como mecanismo para la protección de derechos fundamentales cuando se considere que han sido vulnerados por las autoridades públicas o por los particulares, en los casos que estime la ley. El núcleo esencial del *derecho de petición* reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Como es sabido el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, pues, ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el juez constitucional, una vez analizado el caso particular, pueda proferir un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al afectado, siempre y cuando exista motivo para ello.

Respecto al Derecho Fundamental de Petición, es pertinente indicar que éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política que textualmente reza:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”

Sobre el carácter fundamental de este derecho, ha manifestado la Corte:

"Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (art. 2º Constitución Política).

*"Por tanto, como lo expresa el Tribunal, es un derecho cuya protección puede ser demandada, en casos de violación o amenaza por medio de la acción de tutela."*¹

De igual forma el mencionado derecho, también se encuentra reglado por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que derogó el Decreto 001 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), a partir del 02 de julio de 2012.

La citada Ley respecto del derecho de petición señaló lo siguiente:

"ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

Continúa diciendo la Ley 1755 de 2015 que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 14, lo siguiente:

"ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1799 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su

¹ Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia del 25 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

De otra parte, es importante tener en cuenta lo establecido en el Decreto 491 de 2020, decreto presidencial expedido en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

En su Artículo 5 estableció lo siguiente:

“Ampliación de términos para atender las peticiones.

Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.” (negrillas fuera del texto original)

De lo anterior se desprende que el mencionado derecho exige la necesidad de obtener una respuesta y que la misma sea emitida conforme a los términos establecidos, de igual forma, la respuesta suministrada se debe poner en conocimiento del peticionario, no es menos cierto que el contenido de la misma deberá ser adecuado, es decir, que guarde correspondencia con lo solicitado, sin que lo dicho conlleve necesariamente, a obtener una respuesta favorable; desde luego, aquel se contrae a que la petición se tramite y resuelva oportunamente.

Empero, es probable que lo solicitado deba ser objeto de una actuación especial y que para iniciarla se tengan que llenar ciertos requisitos exigidos por la ley o, lo que es lo mismo, que la decisión no pueda tomarse sino en cumplimiento de un procedimiento sujeto a determinadas reglas. En tal evento, el derecho de petición se satisfará con una respuesta de la administración en tal sentido, es decir, indicando lo que corresponda, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Del caso sub examine se observa que la acción constitucional se interpone en contra del ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, al considerar el accionante que le ha sido conculcado su derecho fundamental de petición, puesto que a la presente fecha la entidad accionada, no le ha brindado una respuesta al derecho de petición de fecha 10 de Mayo de 2021 anexada en la presente acción de tutela.

Por tal motivo se trae a colación la sentencia T-146/12 de nuestro máximo Tribunal Constitucional sobre el alcance de las peticiones elevadas ante a las entidades estatales y que a la letra dice:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. (Subrayado original)

(...)

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión.² Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”³

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición.⁴

Sin embargo, se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición, “(...) producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.”⁵

En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos de faltar a alguna de estas características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso en concreto se tiene que al accionante OMAR TRUJILLO POLANIA no se le ha brindado una respuesta al derecho de petición de fecha 10 de Mayo de 2021 radicado en la misma fecha en la entidad accionada, dirigido a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA y mediante el cual solicita se le remita una serie de documentación del lote

² Ver sentencias T--490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006

³ Sentencia T- 147 de 2006

⁴ Sentencia T-567 de 1992

⁵ Sentencia No. T-242/93

de terreno donde se ubica el Cementerio Central, que es de propiedad del Municipio de Florencia.

Es de advertir que ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA no contesto la presente acción de tutela, Una vez notificado el auto admisorio con el oficio No.133 de fecha 25 de Junio de 2021 el cual fue notificado el día 25 de junio de 2021 a los correos electrónicos, la entidad accionada ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA a pesar de estar debidamente notificada no contestó y guardó silencio, renunciando al derecho de defensa y contradicción; por lo que debe darse aplicación a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que estipula el principio de veracidad, la cual indica que si el informe no fuere rendido o no se hiciera dentro del plazo correspondiente, se tendrán por cierto los hechos y se entrará a resolver de plano, como ya se dijo, la entidad encartada no contestó la tutela, por lo que se tiene por cierto todo lo narrado por la actora en la parte fáctica de la tutela; así mismo en Sentencia T-517/10 con ponencia del magistrado Mauricio Gonzales Cuervo frente al tema indicó que:

“(…) El artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991, consagra la presunción de veracidad como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela, en aquellos eventos en los que el juez requiere cierta información (art. 19 Decreto 2591 de 1991) y aquella no es allegada dentro del plazo respectivo o simplemente no llega, dicha negligencia tiene como consecuencia que los hechos narrados por el accionante en la demanda de tutela sean tenidos como ciertos”

Por lo antes expuesto, demuestra la entidad accionada desinterés al llamado o solicitud de un ciudadano que acude a solicitar lo mínimo que es una respuesta clara, de fondo y de forma oportuna, y su no atención oportuna nos conlleva a reafirmar la conculcación al derecho de petición, por ello habrá de accederse al amparo constitucional reclamado, la entidad no acreditó haber dado respuesta clara, completa y de fondo, a lo pedido por el accionante OMAR TRUJILLO POLANIA; así pues, advierte este Juez constitucional que la entidad accionada se encuentra vulnerando el derecho fundamental de petición, y se ordenará al ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a emitir una respuesta de fondo, de forma clara, completa, y precisa a la petición radicada el 10 de Mayo de 2021, y se notifique de la respuesta al accionante al correo electrónico que autorizo en la petición.

Parte dispositiva.

Son suficientes las anteriores consideraciones para que este Despacho, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVA:

PRIMERO: TUTELAR el derecho constitucional de petición, impetrado por OMAR TRUJILLO POLANIA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.507.855, en contra de ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE


FLORENCIA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a emitir una respuesta de fondo, de forma clara, completa, y precisa a la petición radicada el día 10 de Mayo de 2021, y se notifique de la respuesta al accionante al correo electrónico que autorizo en la petición, adjuntando los comprobantes de envío y recibido que corresponde.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes por el medio más expedito posible, advirtiéndoles que esta decisión podrá ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta providencia, se enviará al día siguiente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Si la tutela es excluida de Revisión, archívese de forma definitiva una vez regrese de la Corte Constitucional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



FREDDY ESPINDOLA SOTO
JUEZ PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA